



ENFOQUES INTERNACIONALES

Venezuela: el tiempo se agota

El objetivo opositor de una transición democrática pacífica en Venezuela es compartido ampliamente por la comunidad internacional y regional. Pero Nicolás Maduro y sus cómplices hacen cada día más difícil el camino para que los venezolanos se liberen de un régimen que, según reitera un informe de la ONU, viola sistemáticamente los derechos humanos.

Con total desparpajo, Maduro rechazó este último informe de la Misión de Determinación de los Hechos, establecida en 2019 por la ONU, que detalla las violaciones a los derechos humanos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad cometidos por su gobierno, las fuerzas de seguridad y los "colectivos" bolivarianos armados después de las elecciones de julio. En cambio, ha anunciado que aceptó la "invitación" del Legislativo para jurar el cargo de Presidente en enero. Esa es la fecha en que debería asumir el legítimo ganador de los comicios, quien según las actas mostradas por la oposición sería Edmundo González. Hasta ahora, el régimen se ha negado a entregar los datos oficiales completos, después de que proclamó el supuesto triunfo de Maduro con un bajo porcentaje de los votos escrutados y sin revelar actas que lo avalen.

La Misión de la ONU ha podido documentar detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual, que serían parte de un plan coordinado para silenciar a los opositores y a personas

que se manifestaron en contra del fraude electoral. Entre ellos habría niños, adolescentes y discapacitados. Según el informe, que amplía uno que se entregó en septiembre al Consejo de Derechos Humanos de la misma ONU, los detenidos son amenazados con torturas para que confiesen delitos de los que no son culpables, incluidos actos de terrorismo. Determina también el documento que no hay debido proceso, que los acusados no tienen acceso a abogados de su confianza y que no se presentan pruebas de los supuestos actos delictivos. Familiares de los detenidos realizan protestas frente a los penales y exigen la liberación de los presos que, además, según sus relatos, sufren condiciones extremas por la falta de comida, agua e higiene en los recintos.

La dictadura venezolana hace oídos sordos a los reiterados llamados de distintos gobiernos para que suelte a los prisioneros, en tanto ha profundizado la persecución de los dirigentes opositores que aún están en Venezuela. En cuanto a María Corina Machado, quien lideró valientemente la campaña electoral, sigue desafiando al ré-

gimen desde la clandestinidad, enviando mensajes de aliento por las redes sociales para evitar que la ciudadanía, atemorizada, deje de luchar por la democracia. Hace unos días, Maduro aseguró que ella había huido a España, a lo cual Machado respondió que el dictador "vive en un universo paralelo", que está "atrincherado en el alto mando militar y se escuda en un sistema represor armado y judicial".

En efecto, la semana pasada Maduro hizo cambios en la cúpula de las FF.AA., con el nombramiento de una treintena de generales y almirantes, la destitución de otros e incluso la detención de algunos oficiales, lo que se ha interpretado como un "reacomodo" de las facciones de poder en el sector castrense y un reforzamiento del apoyo militar al régimen, después de la farsa electoral. En esto Maduro está acompañado del ministro de Interior, Diosdado Cabello, a quien se le reconoce un aumento importante de su poder tras su nombramiento en esa cartera. Lo mismo ocurre con el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa, de férreo control sobre las tropas.

Líderes europeos piden "transición inclusiva"

Son 19 los extranjeros detenidos el último mes en Venezuela. Norteamericanos, españoles, colombianos, un checo y un peruano, todos ellos acusados de complotar contra el régimen, intentar asesinar a autoridades, incluido Maduro, y desestabilizar el país. Cabello es el encargado de informar de estos arrestos y de apuntar a la CIA y al CNI español de estar detrás de las supuestas conspiraciones. Tanto EE.UU. como España han desmentido categóricamente esas denuncias, y la Unión Europea ha exigido que se respeten los Convenios de Viena y se dé acceso a los detenidos.

Preocupados, los líderes europeos, reunidos recientemente en Bruselas, se

pronunciaron directamente por una transición que restaure la democracia. Los europeos han sido reacios a reconocer a Edmundo González como ganador, pero han declarado que no reconocerán a Maduro si este asume en enero sin haber mostrado las actas que lo acrediten y puedan ser verificadas. La UE puede jugar un papel clave en la búsqueda de una salida a la crisis. Lo dijo Josep Borrell, el encargado de la política exterior del bloque: "La UE está dispuesta a usar todas sus herramientas y su capacidad diplomática, todas las medidas, para apoyar al pueblo venezolano en su lucha democrática".

Como señaló María Corina Machado, "es imperativo aumentar el costo

de su permanencia (de Maduro en el poder) para precipitar su salida". Para no quedarse solo en declaraciones, los líderes europeos deberían empujar iniciativas concretas de presión que efectivamente consigan un cambio de régimen. Deben ir más allá de esperar coordinarse con países de la región (ya se vio que Colombia y Brasil no tienen la capacidad o la voluntad de convencer a Maduro), para restaurar las instituciones democráticas en Venezuela. El plazo para una transición democrática es el 10 de enero próximo: si Maduro asume en las actuales condiciones, habrá cruzado ya completamente el umbral de la ilegalidad y de la usurpación del poder.